

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID (pp. 2-9)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A LA
COMUNITAT DE MADRID (pp. 10-17)**

ANTONIO FORTES MARTÍN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Carlos III de Madrid

|

Sumario: 1. Medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público con impacto en la protección ambiental a finales de 2010. 2. El inicio del año 2011. 2.1. Modificación del Consejo de Medio Ambiente. 2.2. Protección de la fauna y pesca fluvial. 2.3. Espacios naturales y vías pecuarias. 2.4. Protección contra la contaminación acústica y térmica.

1. Medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público con impacto en la protección ambiental a finales de 2010

Con el inicio del año 2011 comenzamos esta crónica dando cuenta de la aprobación, a finales del año pasado, de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

Como fácilmente puede inferirse, el alcance de dicha disposición trasciende el escenario puramente ambiental que ahora nos interesa. No obstante, nos hacemos eco de esta norma en la medida en que incorpora una serie de modificaciones con interés para el conjunto del ordenamiento jurídico ambiental de la Comunidad de Madrid. En este sentido, son varias las modificaciones que merecen ser destacadas.

En primer lugar, el artículo 2 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, modifica parcialmente el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. Por lo que ahora merece ser destacado, se modifica el capítulo XXXVII del título IV de la Ley de Tasas y Precios Públicos madrileña, donde se regula la tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica. En concreto, el objeto de la modificación se refiere, en primer lugar, a la supresión, en el hecho imponible (art. 211), de la autorización de utilización de la etiqueta ecológica, constituyendo el único hecho imponible en la actualidad “la realización por la Comunidad de Madrid de la tramitación, a petición del sujeto pasivo, de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica para un producto o servicio determinado”. En segundo lugar, por lo que a la tarifa se refiere, la modificación introduce un incremento de 250 euros en la tarifa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica (se pasa de 500 euros a 750 euros). Y, además, se introduce una tarifa “reducida” para la solicitud de etiqueta ecológica por parte de pequeñas y medianas empresas, así como por parte de operadores en vías de desarrollo (de 350 euros) y microempresas (de 200 euros). Y en tercer término, la modificación del régimen de la tasa por solicitud de concesión de etiqueta ecológica simplifica el sistema anterior de bonificaciones, de modo que solo se mantiene una única bonificación si el solicitante cuenta con la certificación EMAS o ISO 14001.

Además, esta bonificación ve incrementada su cuantía al pasar del 15% anterior al 20% actual.

Por lo que se refiere a la segunda de las modificaciones de normas de corte ambiental que cabe reseñar, el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, modifica parcialmente la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el artículo 73.b) de infracciones leves es ampliado, de modo que la infracción prevista en ese precepto —el abandono o vertido de residuos derivados del consumo privado— deja de ir referida a la vía pública para ampliarse a los “espacios públicos”. Por otra parte, el artículo 70, referido al régimen de responsabilidad, es también objeto de modificación. Este precepto dispone que los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de estos, y se añade una letra c) al apartado cuarto del precepto citado en la que se establece que si un menor de edad —con catorce años cumplidos— comete la infracción leve consistente en el abandono o vertido en espacios públicos de residuos derivados del consumo privado, la responsabilidad será solidaria, por lo que se extenderá la sanción de multa que pueda recaer sobre el menor a los padres, tutores acogedores o guardadores legales del menor.

En tercer lugar, la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, contempla en su título III una serie de medidas de racionalización del sector público. Entre estas medidas, el capítulo II prevé la racionalización de organismos autónomos, entidades de derecho público, entes públicos y órganos administrativos, por lo que se procede a la supresión de algunos de ellos. Y este es el caso (art. 22) de la extinción del hasta entonces organismo autónomo de carácter administrativo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que fue creado por la Ley 9/86, de 20 de noviembre, disposición esta que, en lógica consecuencia, pasa a quedar derogada conforme prescribe la disposición derogatoria única de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre.

2. El inicio del año 2011

En otro orden de cosas y ya entrado el año 2011, son cuatro las disposiciones aprobadas que merecen nuestra atención en esta crónica. Tres de ellas de ámbito autonómico y la cuarta referida al Ayuntamiento de Madrid.

En el plano autonómico, y por estricto orden cronológico, apuntamos el Decreto 10/2011, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; la Orden 646/2011, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2011, y la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Finalmente, ya en el ámbito municipal de la capital, la cuarta disposición es el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de febrero de 2011, por el que se aprueba la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

2.1. Modificación del Consejo de Medio Ambiente

Comenzando por el Decreto 10/2011, de 17 de febrero, de modificación del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, cabe apuntar que ya la derogada Ley 3/88, de 13 de octubre, para la gestión del medio ambiente de la Comunidad de Madrid, contemplaba la necesidad de que la Comunidad Autónoma se dotara de un órgano consultivo y asesor de la entonces vigente Agencia de Medio Ambiente autonómica. Pues bien, el mencionado Consejo de Medio Ambiente fue creado por Decreto 103/96, de 4 de julio, con el fin de impulsar la participación de las organizaciones interesadas en la defensa del medio ambiente y de personas de reconocido prestigio en la elaboración y el seguimiento de la política ambiental. A tal fin, el Consejo de Medio Ambiente — adscrito a efectos administrativos a la Consejería de Medio Ambiente— sirve como cauce de participación en la defensa y protección del medio ambiente en la Comunidad, y como un medio de articulación y presencia en la política ambiental madrileña de organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores y otras administraciones, al desarrollar a tal fin funciones de consulta y asesoramiento.

La razón de ser de esta modificación descansa en la coyuntura económica que viene atravesando el país y, con él, la Comunidad Autónoma de Madrid, donde la Administración regional ha tratado de desplegar una política de eficiencia y racionalización del sector público sobre la base de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre. Así las cosas, y en el marco del plan de racionalización del sector público madrileño, el nuevo Decreto 10/2011, de 17 de febrero, procede a la reorganización de las funciones

que tiene encomendadas el Consejo de Medio Ambiente, sobre todo por lo que respecta a su estructura y composición. El “actual” Consejo de Medio Ambiente se estructura en el Pleno y cuatro secciones. La composición del Pleno, tal y como se trasluce del artículo 4, no varía sobremanera al seguir estando constituido por un presidente, un vicepresidente —cargos que pasan a ser ocupados por los titulares de la Consejería y Viceconsejería de Medio Ambiente, respectivamente—, un secretario —cargo que sigue recayendo en un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, designado por la consejera— y los distintos vocales. En la representación de los vocales, merece destacarse que ha habido una reducción de los representantes de las ONG cuyo objeto es la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible (de tres a dos representantes), de los representantes de las universidades madrileñas (de tres a uno), y de los expertos designados entre personas de reconocido prestigio cuya actividad tenga relación directa con los temas ambientales (de tres a dos).

Pero, sin duda, lo más significativo de la modificación realizada en el Consejo de Medio Ambiente es la creación de distintas secciones con el objeto de tratar de forma intensiva los diferentes asuntos sectoriales propios de cada sección. El Decreto 10/2011, de 17 de febrero, prevé la existencia de cuatro secciones, sin perjuicio de que pueden llegar a crearse nuevas secciones por orden de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Estas cuatro secciones, cuyo régimen —por lo que respecta básicamente a composición y funciones— aparece dispuesto, sucesivamente, en los artículos 8 a 11 del Decreto 10/2011, son la Sección de Parques Regionales y Naturales, la Sección de Caza y Pesca Fluvial, la Sección de Vías Pecuarias y la Sección de Calidad del Aire.

2.2. Protección de la fauna y pesca fluvial

Por lo que respecta a la protección de la fauna, en el período que ahora abordamos debemos dar cuenta de una disposición específica para la protección de especies en la Comunidad de Madrid dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el marco general de las vedas, limitaciones y épocas hábiles de caza. Nos referimos a la Orden 646/2011, de 24 de febrero, de establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2011.

La conservación y regulación de las poblaciones piscícolas que habitan en las masas de agua de la Comunidad de Madrid precisan de un aprovechamiento ordenado. Y como quiera que, a partir de las previsiones estatutarias, la Comunidad de Madrid tiene atribuidas las funciones de protección, conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de la riqueza piscícola continental, y la aplicación de las medidas conducentes a la consecución de estos fines, así como la vigilancia y el control de las aguas continentales en lo que se refiere a la riqueza piscícola, la Orden objeto ahora de estudio contempla la regulación, para el año 2011, del ejercicio de la pesca deportiva en el ámbito de las aguas de la Comunidad de Madrid.

La disposición no establece una regulación particularmente destacada, por novedosa, de la existente en años anteriores. Más bien se recrea una ordenación administrativa típica o al uso detallando pormenorizadamente en sus veintinueve artículos los permisos de pesca (distintos de la licencia de pesca que debe tener el interesado previamente), las especies objeto de pesca deportiva en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (que son las relacionadas en el anexo I de la Orden) mediante las artes y los métodos legales en los tramos autorizados a tal fin (punto en el que se diferencian tramos libres, tramos acotados, tramos de pesca controlada, tramos experimentales de pesca y tramos vedados —art. 12—), las dimensiones mínimas de las especies objeto de pesca y los cupos máximos, entre otros extremos.

2.3. Espacios naturales y vías pecuarias

En lo relativo a la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, cabe tener presente que hace ahora justo un año ya dábamos cuenta —en la primera crónica de esta revista, de abril de 2010— del proyecto de Ley 5/2009 (RGEP 4993), de la Cañada Real Galiana (que fue publicado en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* núm. 151, de 1 de octubre de 2009). La tramitación parlamentaria seguida ha permitido finalmente contar, en la Comunidad de Madrid, con una ley específica para la Cañada Real a la que ahora ya podemos hacer referencia en esta crónica como texto aprobado y publicado en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*. La explicación de este fenómeno se encuentra en el hecho de que la importancia de la Cañada Real Galiana en la tradición y en la historia de la Comunidad de Madrid como vía pecuaria —aunque no se trate, propiamente hablado, de un espacio natural—, y, por ende, como bien de dominio

público, con un importante valor ambiental añadido, justifica la aprobación de una norma que pase a regular su régimen jurídico en parte de su trazado.

En efecto, lo primero que merece destacarse de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, es que la norma dispone y contempla como objeto el régimen jurídico (art. 1) no de la completa Cañada, sino solo del tramo de aproximadamente 14,2 kilómetros que discurre por los términos municipales de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid (en sus distritos de Vicálvaro y Vallecas), conforme a la definición realizada por las órdenes del Ministerio de Agricultura de 31 de enero de 1958, de 24 de junio de 1964 y de 11 de junio de 1968.

El sentido y el alcance de la Ley se enmarcan en un fenómeno que viene experimentando no solo la Comunidad de Madrid, sino todo el conjunto del país desde la década de los sesenta con el abandono masivo de la trashumancia y la consiguiente y lógica desafectación de los terrenos que le daban soporte hasta entonces como vías pecuarias al desaparecer su uso tradicional.

Como constata la exposición de motivos de la Ley, actualmente el tránsito ganadero en el tramo de la Cañada Real perteneciente a los tres municipios mencionados es nulo. Es más, la vía pecuaria se encuentra ocupada *de facto* por un camino por el que circulan vehículos a motor y por numerosas edificaciones muchas de ellas ilegales, donde se vive desde hace años un auténtico y conflictivo drama social que la Ley también trata de solventar en su disposición adicional primera y en sus disposiciones transitoria primera y segunda.

Por todo ello, el objeto de esta Ley no es otro que proceder a la desafectación íntegra del tramo de la Cañada Real descrito *ut supra* en toda su extensión, por no resultar ya adecuado al tránsito ganadero ni tampoco apto para los usos compatibles y complementarios establecidos en la Ley 8/98, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de Madrid (art. 2), por lo que pierde, consecuentemente, su condición de vía pecuaria. Ahora bien, esta desafectación no implica ningún corte en el tránsito ganadero, ya que la amplia y variada red de vías pecuarias con la que cuenta la Comunidad de Madrid (más de 4.000 kilómetros) asegura otros itinerarios alternativos.

Como consecuencia de esa desafectación, los terrenos demaniales desafectados, como no podía ser de otra manera, pasan (art. 3) a tener la condición de patrimoniales, por lo que la Comunidad de Madrid puede, como titular de estos y al amparo de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, disponer de ellos mediante

cualquier negocio jurídico permitido por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, o incluso cederlos, preferentemente a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentran o, en caso de que los ayuntamientos interesados no ejerzan esa opción preferente, a terceras personas. Esta desafectación obliga a que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, los ayuntamientos procedan a adaptar la clasificación del suelo en el ejercicio de sus competencias urbanísticas (mediante modificación puntual de sus planes generales), como también a alcanzar un acuerdo marco de contenido social, al que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley, con los directamente implicados por la desafectación ope legis, ya que, como la propia exposición de motivos de la Ley enfatiza y, ulteriormente, la citada disposición adicional segunda contempla, el nuevo escenario se entiende sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por los ocupantes de los terrenos en virtud de las enajenaciones válidamente realizadas en su día por el Ministerio de Agricultura conforme a la normativa entonces vigente, o por la prescripción adquisitiva de los terrenos en su día desafectados al amparo de las normas civiles, con lo que las personas físicas o jurídicas con título legítimo de propiedad pueden hacer valer sus derechos tanto ante la Comunidad de Madrid como ante los ayuntamientos afectados.

2.4. Protección contra la contaminación acústica y térmica

Finalmente, y aunque no referido a la Comunidad de Madrid, sino con un alcance restringido a la ciudad de Madrid, debemos dar cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de febrero de 2011, por el que se aprueba la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

La Ordenanza tiene por objeto, conforme prescribe su artículo 1, regular el ejercicio de las competencias que, en materia de protección ambiental y salud pública, corresponden al Ayuntamiento de Madrid para proteger a las personas y los bienes contra las agresiones derivadas de la contaminación acústica y térmica.

El Ayuntamiento de Madrid ya aprobó, con fecha 31 de mayo de 2004, la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía. Esta disposición, como precedente de la actual, permitió en su momento abordar de una forma pionera, a nivel municipal, la lucha contra la contaminación acústica, y ello tan

solo meses después de la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Desde entonces, una de las prioridades del Ayuntamiento de Madrid ha sido la de actualizar la citada Ordenanza, lo que ha tenido un reflejo final en el actual texto de 25 de febrero de 2011. Para ello, ha resultado capital la necesidad de integrar e incorporar al ordenamiento municipal dos reales decretos de desarrollo reglamentario de la Ley estatal del Ruido de 2003 —RD 1513/2005, de 16 de diciembre, y RD 1367/2007, de 19 de octubre—. La Ordenanza de 2011 asume estos postulados disponiendo un régimen general de prevención y corrección de la contaminación acústica y térmica sobre la base, como prescribe la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de una evaluación y gestión del ruido ambiental y de una evaluación del ruido y las vibraciones de los emisores acústicos.

Pero, a mayor abundamiento, en este nuevo marco normativo constituido por la Ordenanza de 2011 ha pesado mucho la voluntad de conciliar, por un lado, el descanso de los vecinos con, por el otro, el desarrollo de actividades susceptibles de ser productoras de ruido en la ciudad. En este sentido, la nueva ordenanza municipal contempla un régimen de condiciones exigibles i) para la edificación y sus instalaciones respecto a la contaminación acústica y térmica; ii) para las actividades comerciales, industriales y de servicios; iii) para los vehículos de motor y ciclomotores, y iv) para los usuarios de la vía pública, las actividades domésticas y las relaciones de vecindad.

Sumari: 1. Mesures fiscals, administratives i de racionalització del sector públic amb impacte en la protecció ambiental a finals de 2010. 2. L'inici de 2011. 2.1. Modificació del Consell de Medi Ambient. 2.2. Protecció de la fauna i pesca fluvial. 2.3. Espais naturals i vies pecuàries. 2.4. Protecció contra la contaminació acústica i tèrmica.

1. Mesures fiscals, administratives i de racionalització del sector públic amb impacte en la protecció ambiental a finals de 2010

Amb l'inici de 2011 comencem aquesta crònica donant compte de l'aprovació, a finals de l'any passat, de la Llei 9/2010, de 23 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de racionalització del sector públic de la Comunitat de Madrid.

Com podem inferir fàcilment, l'abast d'aquesta disposició transcendeix l'escenari purament ambiental que ara ens interessa. No obstant això, ens fem ressò d'aquesta norma en la mesura que incorpora una sèrie de modificacions interessants per al conjunt de l'ordenament jurídic ambiental de la Comunitat de Madrid. En aquest sentit, són diverses les modificacions que hem de destacar.

En primer lloc, l'article 2 de la Llei 9/2010, de 23 de desembre, modifica parcialment el Decret legislatiu 1/2002, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Comunitat de Madrid. Cal destacar que es modifica el capítol XXXVII del títol IV de la llei de taxes i preus públics madrilenya, en què es regula la taxa per sol·licitar la concessió d'etiqueta ecològica. En concret, l'objecte de la modificació versa, primer, sobre la supressió de l'autorització d'utilització de l'etiqueta ecològica en el fet imposable (art. 211), amb la qual cosa, actualment, l'únic fet imposable el constitueix "la realización por la Comunitat de Madrid, de la tramitación, a petición del sujeto pasivo, de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica para un producto o servicio determinado". En segon lloc, pel que fa a la tarifa, actualment la modificació introduïda la incrementa de 500 euros a 750 euros per sol·licitar la concessió de l'etiqueta ecològica. I, a més, s'introdueix una tarifa "reduïda" per a la sol·licitud d'etiqueta ecològica de cara a les petites i mitjanes empreses, i també de cara als operadors en països de desenvolupament (de 350 euros) i microempreses (de 200 euros). I en tercer lloc, la modificació del règim de la taxa per sol·licitar la concessió d'etiqueta ecològica simplifica el sistema anterior de bonificacions, de manera que només perviu una bonificació única si el sol·licitant té la certificació EMAS o ISO 14001. A més, aquesta bonificació s'incrementa del 15% anterior al 20% actual.

Pel que fa a la segona de les modificacions de normes de caràcter ambiental que cal ressenyar, l'article 13 de la Llei 9/2010, de 23 de desembre, modifica parcialment la Llei 5/2003, de 20 de març, de residus de la Comunitat de Madrid. En aquest sentit, l'article 73.b), d'infraccions lleus, s'amplia, de manera que la infracció que preveu aquest precepte —consistent en l'abandonament o abocament de residus derivats del consum privat— ja no està referida a la via pública, sinó que s'amplia a “espais públics”. D'altra banda, l'article 70, referit al règim de responsabilitat, també es modifica. Aquest precepte disposa que els residus sempre han de tenir un titular responsable, qualitat que correspon al seu productor, posseïdor o gestor, i s'afegeix la lletra c) a l'apartat quart del precepte esmentat, de manera que si algun menor d'edat — amb catorze anys complerts— comet una infracció lleu consistent a abandonar o abocar residus derivats del consum privat en espais públics, la responsabilitat és solidària, i s'estén que la sanció de multa sobre el menor pugui recaure als pares, tutors acollidors, o guardadors legals.

En tercer lloc, la Llei 9/2010, de 23 de desembre, preveu en el títol III una sèrie de mesures de racionalització del sector públic. Entre aquestes mesures, el capítol II preveu racionalitzar organismes autònoms, entitats de dret públic, ens públics i òrgans administratius, i en suprimeix algun. I aquest és el cas (art. 22) de l'extinció del fins llavors organisme autònom de caràcter administratiu Patronat Madrileny d'Àrees de Muntanya, que es va crear mitjançant la Llei 9/86, de 20 de novembre, disposició que, lògicament, queda derogada d'acord amb el que prescriu la disposició derogatòria única de la Llei 9/2010, de 23 de desembre.

2. L'inici de 2011

En un altre ordre de coses i ja entrat el 2011, les disposicions aprovades que mereixen la nostra atenció en aquesta crònica són quatre. Tres d'àmbit autonòmic, i la quarta fa referència a l'Ajuntament de Madrid.

Des del punt de vista autonòmic, i seguint un ordre cronològic estricte, destaquem el Decret 10/2011, de 17 de febrer, del Consell de Govern, pel qual es modifica el Consell de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid; l'Ordre 646/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Medi Ambient, Habitatge, i Ordenació del Territori, d'establiment de vedes i regulació especial de l'activitat piscícola en rius, rierols i embassaments de la

Comunitat de Madrid per a l'exercici 2011, i la Llei 2/2011, de 15 de març, de la Cañada Real Galiana. Finalment, la disposició quarta constitueix, en l'àmbit municipal de la capital, l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Madrid, de 25 de febrer de 2011, pel qual s'aprova l'ordenança de protecció contra la contaminació acústica i tèrmica.

2.1. Modificació del Consell de Medi Ambient

Començant pel Decret 10/2011, de 17 de febrer, de modificació del Consell de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid, cal apuntar que la derogada Llei 3/88, de 13 d'octubre, per a la gestió del medi ambient de la Comunitat de Madrid preveia la necessitat que la comunitat autònoma es dotés d'un òrgan consultiu i assessor de la llavors vigent Agència de Medi Ambient autonòmica. Doncs bé, l'esmentat Consell de Medi Ambient es va crear pel Decret 103/96, de 4 de juliol, amb la finalitat d'impulsar la participació de les organitzacions interessades en la defensa del medi ambient i de persones de reconegut prestigi en l'elaboració i el seguiment de la política ambiental. Amb aquesta finalitat, el Consell de Medi Ambient —adscriu a efectes administratius a la Conselleria de Medi Ambient— serveix com a via de participació en la defensa i protecció del medi ambient en la comunitat, i com a mitjà d'articulació i de presència en la política ambiental madrilenya d'organitzacions empresarials, sindicats, organitzacions de consumidors i altres administracions, i du a terme funcions de consulta i d'assessorament.

La raó de ser d'aquesta modificació està en la conjuntura econòmica que travessa el país i, amb aquest, la Comunitat Autònoma de Madrid, on l'Administració regional ha intentat desplegar una política d'eficiència i de racionalització del sector públic basant-se en la Llei 9/2010, de 23 de desembre. D'aquesta manera, i en el marc del pla de racionalització del sector públic madrileny, el nou Decret 10/2011, de 17 de febrer, reorganitza les funcions que té encomanades el Consell de Medi Ambient, sobretot pel que fa a estructura i composició. L'"actual" Consell de Medi Ambient s'estructura en el Ple i quatre seccions. La composició del Ple, tal com reflecteix l'article 4, no varia en gran manera, ja que continua constituït per un president, un vicepresident —càrrecs que passen a ser ocupats pels titulars de la Conselleria i Viceconselleria de Medi Ambient, respectivament —, un secretari —càrrec que continua recaient en un funcionari de la Conselleria de Medi Ambient, Habitatge, i Ordenació del Territori, designat per la consellera— i els diferents vocals. En la representació dels vocals, cal destacar que es

redueixen els representants de les ONG que tenen per objecte la defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible (de tres a dos representants), els representants de les universitats madrilenyes (de tres a un), i els experts designats entre persones de reconegut prestigi, l'activitat dels quals tingui relació directa amb temes ambientals (de tres a dos).

Però, sens dubte, el més significatiu de la modificació realitzada en el Consell de Medi Ambient és la creació de diferents seccions a fi d'atendre de forma intensiva els diferents assumptes sectorials propis de cada secció. El Decret 10/2011, de 17 de febrer, preveu l'existència de quatre seccions, deixant de banda que es poden arribar a crear noves seccions per ordre de la consellera de Medi Ambient, Habitatge, i Ordenació del Territori. Aquestes quatre seccions, el règim de les quals —pel que fa bàsicament a composició i funcions— es disposa, successivament, en els articles del 8 a l'11 del Decret 10/2011, són la Secció de Parcs Regionals i Naturals, la Secció de Caça i Pesca Fluvial, la Secció de Camins Ramaders i la Secció de Qualitat de l'Aire.

2.2. Protecció de la fauna i pesca fluvial

Pel que fa a la protecció de la fauna, en el període que ara abordem, hem de destacar la disposició específica per a la protecció d'espècies a la Comunitat de Madrid dictada per la Conselleria de Medi Ambient, Habitatge i Ordenació del Territori en el marc general de vedes, limitacions i èpoques hàbils de caça. Ens referim a l'Ordre 646/2011, de 24 de febrer, d'establiment de vedes i regulació especial de l'activitat piscícola als rius, rierols i embassaments de la Comunitat de Madrid per a l'exercici de 2011.

La conservació i regulació de les poblacions piscícoles que habiten a les masses d'aigua de la Comunitat de Madrid necessita un aprofitament ordenat. I, ja que a partir de les previsions estatutàries, la Comunitat de Madrid té atribuïdes les funcions de protecció, conservació, foment i aprofitament ordenat de la riquesa piscícola continental i l'aplicació de les mesures conduents a aconseguir aquests fins, així com la vigilància i el control de les aigües continentals, pel que fa a la riquesa piscícola, ara l'ordre objecte d'estudi preveu regular, per al 2011, l'exercici de la pesca esportiva en l'àmbit de les aigües de la Comunitat de Madrid.

La disposició no estableix cap regulació particularment destacada, per nova, de l'existent en anys anteriors. Més aviat es recrea una ordenació administrativa típica o a

l'ús que detalla en els seus 29 articles els permisos de pesca (diferents de la llicència de pesca que ha de tenir l'interessat prèviament), les espècies objecte de pesca esportiva en l'àmbit territorial de la Comunitat de Madrid (que són les relacionades en l'annex I de l'Ordre) mitjançant les arts i els mètodes legals en els trams autoritzats per a aquesta finalitat (en què es diferencien en aquest punt trams lliures, trams tancats, trams de pesca controlada, trams experimentals de pesca, i trams vedats —art. 12—), les dimensions mínimes de les espècies objecte de pesca, i les quotes màximes, entre altres extrems.

2.3. *Espais naturals i vies pecuàries*

Pel que fa a la Llei 2/2011, de 15 de març, de la Cañada Real Galiana, cal tenir present que ara fa justament un any, en la primera crònica d'aquesta Revista, d'abril de 2010, ja donàvem compte del Projecte de Llei 5/2009 (RGEP 4993), de la Cañada Real Galiana (que es va publicar en el *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid* núm. 151, d'1 d'octubre de 2009). La tramitació parlamentària seguida, finalment ha permès a la Comunitat de Madrid comptar amb una llei específica per a la Cañada Real que ja podem esmentar en aquesta crònica com a text aprovat i publicat en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*. L'explicació d'aquest fenomen es troba en el fet que, encara que no és pròpiament dit un espai natural, la importància de la Cañada Real Galiana en la tradició i en la història de la Comunitat de Madrid com a camí ramader i, per tant, com a bé de domini públic, amb un valor ambiental afegit, justifiquen l'aprovació d'una norma que passi a regular-ne el règim jurídic en part del traçat.

En efecte, el primer que cal destacar de la Llei 2/2011, de 15 de març, és que la norma disposa i preveu com a objecte el règim jurídic (art. 1), no de la canyada completa, sinó només del tram d'aproximadament 14,2 quilòmetres que discorre pels termes municipals de Coslada, Rivas Vaciamadrid i Madrid (en els districtes de Vicálvaro i Vallecas) d'acord amb la definició de les ordres del Ministeri d'Agricultura de 31 de gener de 1958, de 24 de juny de 1964 i d'11 de juny de 1968.

El sentit i l'abast de la llei s'emmarquen en un fenomen que experimenta no només la Comunitat de Madrid, sinó tot el conjunt del país a partir de la dècada dels anys seixanta amb l'abandonament massiu de la transhumància i la consegüent i lògica desafectació

dels terrenys que hi donaven suport fins llavors com a camí ramader en desaparèixer-ne l'ús tradicional.

Com constata l'exposició de motius de la llei, actualment el trànsit ramader en el tram de la Cañada Real pels tres municipis esmentats és nul. Encara més, el camí ramader es troba de facto ocupat per un vial pel qual circulen vehicles de motor, i per nombroses edificacions (moltes de les quals il·legals) que originen des de fa anys un autèntic i conflictiu drama social que la llei també tracta de solucionar en la disposició addicional primera i en les disposicions transitòria primera i segona.

Per tot això, l'objecte d'aquesta llei no és altre que procedir a la desafectació íntegra del tram de la Cañada Real descrit *ut supra* en tota la seva extensió, perquè ja no és adequat al trànsit ramader ni tampoc susceptible dels usos compatibles i complementaris establerts en la Llei 8/98, de vies pecuàries de Madrid (art. 2), i perd, consegüentment, la condició de camí ramader. Ara bé, aquesta desafectació no implica cap tall en el trànsit ramader, ja que l'àmplia i variada xarxa de vies pecuàries que té la Comunitat de Madrid (més de 4.000 quilòmetres) assegura altres itineraris alternatius.

Com a conseqüència d'aquesta desafectació, els terrenys demanials desafectats, com no podia ser d'altra manera, passen a tenir la condició de patrimonials (art. 3), i la Comunitat de Madrid, com a titular, i a l'empara de la Llei 3/2001, de 21 de juny, de patrimoni de la Comunitat de Madrid, en pot disposar mitjançant qualsevol negoci jurídic permès per la Llei 3/2001, de 21 de juny, de patrimoni de la Comunitat de Madrid o, fins i tot, cedir-los preferentment als ajuntaments dels termes municipals on es troben, i en cas de no exercir aquesta opció preferent els ajuntaments interessats, a terceres persones. Aquesta desafectació obliga que, en el termini de dos anys de l'entrada en vigor de la llei, els ajuntaments han d'adaptar la classificació del sòl en l'exercici de les seves competències urbanístiques (mitjançant la modificació puntual dels seus plans generals), i també assolir un acord marc de contingut social, a què es refereix la disposició addicional segona de la llei amb els directament implicats per la desafectació *ope legis*, ja que, com la mateixa exposició de motius de la llei emfatitza i, ulteriorment, l'esmentada disposició addicional segona preveu, el nou escenari s'entén sense perjudici dels drets legítimament adquirits pels ocupants dels terrenys en virtut de les alienacions vàlidament realitzades en el seu dia pel Ministeri d'Agricultura, d'acord amb la normativa aleshores vigent, o per la prescripció adquisitiva dels terrenys en el seu moment desafectats a l'empara de les normes civils, de manera que les persones

físiques o jurídiques amb títol legítim de propietat poden fer valer els seus drets tant davant la Comunitat de Madrid com davant els ajuntaments afectats.

2.4. Protecció contra la contaminació acústica i tèrmica

Finalment, i encara que no fa referència a la Comunitat de Madrid, sinó que més bé presenta un abast més restringit a la ciutat de Madrid, hem de donar compte de l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Madrid, de 25 de febrer de 2011, pel qual s'aprova l'ordenança de protecció contra la contaminació acústica i tèrmica.

Aquesta ordenança té per objecte, d'acord amb el que prescriu l'article 1, regular l'exercici de les competències que, en matèria de protecció ambiental i salut pública, corresponen a l'Ajuntament de Madrid per protegir persones i béns contra les agressions derivades de la contaminació acústica i tèrmica.

L'Ajuntament de Madrid ja va aprovar, amb data 31 de maig de 2004, l'ordenança de protecció de l'atmosfera contra la contaminació per formes d'energia. Aquesta disposició, com a precedent de l'actual, va permetre en el seu moment abordar d'una manera pionera, des del punt de vista municipal, la lluita contra la contaminació acústica, i això tan sols mesos després d'haver aprovat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. Des de llavors, una de les prioritats de l'Ajuntament de Madrid ha estat la d'actualitzar ordenança l'esmentada, cosa que s'ha reflectit en l'actual Text de 25 de febrer de 2011. Per això, ha resultat capital la necessitat d'integrar i incorporar a l'ordenament municipal dos reials decrets de desplegament reglamentari de la llei estatal del soroll de 2003 —RD 1513/2005, de 16 de desembre i RD 1367/2007, de 19 d'octubre. I l'Ordenança de 2011 assumeix aquests postulats i disposa un règim general de prevenció i correcció de la contaminació acústica i tèrmica sobre la base, com prescriu la Llei 37/2003, de 17 de novembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental, i d'avaluació del soroll i vibracions dels emissors acústics.

Però, a més a més, en aquest nou marc normatiu constituït per l'Ordenança de 2011, ha pesat molt la voluntat de conciliar el descans dels veïns, d'una banda, activitats susceptibles de ser productores de soroll a la ciutat, de l'altra. En aquest sentit, la nova ordenança municipal preveu un règim de condicions exigibles *i)* per a l'edificació i les seves instal·lacions respecte a la contaminació acústica i tèrmica; *ii)* per a les activitats

comercials, industrials i de serveis; *iii*) per als vehicles de motor i ciclomotors; *iv*) per als usuaris de la via pública, activitats domèstiques i relacions de veïnatge.